



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I.¹, tres de mayo de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05266 31 03 001 2006 00324 03
Proceso.	Ejecutivo
Demandante.	Carlos César Lulle Borda
Demandada.	Luis Guillermo Vélez Upegui
Procedencia.	Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado
Decisión.	Confirma auto que aprobó liquidación de costas
Tema.	Parámetros para establecer el monto por concepto de costas y rangos de tarifas establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura para tal efecto.
Rdo. interno.	107-22
Interlocutorio No.	089-23

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandada en contra del auto del 26 de febrero de 2020, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas efectuada dentro del proceso ejecutivo formulado por Carlos César Lulle Borda en contra de Luis Guillermo Vélez Upegui.

ANTECEDENTES

1.- Del trámite. El 27 de octubre de 2006, Carlos César Lulle Borda, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva, pretendiendo el recaudo de la obligación adeudada por Luis Guillermo Vélez Upegui,

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. “La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.”

incorporada en un pagaré, por lo que, mediante auto del 30 de octubre del mismo año, se libró mandamiento ejecutivo por la suma de \$250.000.000, como capital, más los intereses de plazo causados entre el 01 de junio de 2006 y el 01 de julio del mismo año, a la tasa pactada del 0.8%, siempre y cuando no supere la máxima permitida; más los intereses moratorios, a la tasa máxima legal permitida, desde el 02 de julio de 2006, hasta el pago total de la obligación (Página 1 a 9, Archivo 01 del EXPEDIENTE FÍSICO ESCANEADO).

Dicha providencia le fue notificada al demandado personalmente el 08 de marzo de 2007, por intermedio de apoderado judicial, conforme al poder conferido el 02 del mismo mes y año, quien oportunamente propuso como excepciones de mérito (Pág. 15 a 29, *ibídem*):

- *“...las fundadas en la falta de requisitos para el ejercicio de la acción, de que trata el numeral 10° del Art. 784 del C. de Co.”*
- *“...las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley supla expresamente, de que trata el numeral 4° del Art. 784 del C. de Co.”*
- *“...las fundadas en la no negociabilidad del título y las fundadas en la entrega del título sin intención de hacerlo negociable, contra quien no sea tenedor de buena fe, de que tratan los numerales 6° y 11 del Art. 784 del C. de Co.”*

De las referidas excepciones se dio traslado a la parte contraria por auto del 30 de marzo de 2007, el cual fue aprovechado dentro de la oportunidad legalmente concedida; agotado dicho término, se decretaron pruebas en proveído del 17 de julio de la misma anualidad, adicionado por auto de julio 12 de 2007, en contra del cual la demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio, el de apelación por haberse negado una de las pruebas por ella solicitada, siendo definidos por auto del 08 de agosto de 2007, de manera desfavorable el primero, y concediéndose en consecuencia, el segundo en el efecto devolutivo (Pág. 40 a 50, *ejusdem*).

La decisión impugnada fue confirmada por esta Corporación, mediante providencia fechada el 12 de julio de 2007, por lo que una vez evacuado el período probatorio y agotados los traslados para alegar, se dictó sentencia el 08 de octubre de 2008, declarándose infundadas las excepciones formuladas y ordenándose seguir adelante con la ejecución, siendo apelada de manera oportuna por la parte demandada (Pág. 55 a 93 del Archivo 01 del EXPEDIENTE FÍSICO ESCANEADO).

Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2019, se revocó el fallo de primer grado, para en su lugar, declarar probada *“la excepción cambiara enunciada en el 4° del artículo 784 del Código de Comercio, esto es, la fundada en la omisión de los requisitos que el título debe contener y que la ley no suple expresamente, concretamente la falta de claridad de la obligación incorporada en el pagaré, ante la fijación de dos fechas de vencimiento diferentes”* y en consecuencia, se ordenó cesar la ejecución y se condenó a la parte demandada al pago de las costas causadas en ambas instancias, fijándose como agencias en derecho la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIE DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$1,656,232), equivalentes a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha en que se profiere la sentencia (Pág. 28 a 53, Archivo 2 *Ib.*).

En proveído del 18 de febrero de 2020, se fijaron como agencias en derecho para la primera instancia, la suma de \$8.000.000, con fundamento en la cual la secretaría elaboró la liquidación de costas el 25 de febrero del mismo año (Pag. 97 y 98 del Archivo 1 del EXPEDIENTE FÍSICO ESCANEADO).

3.- El auto apelado. El 27 de febrero de 2020, se aprobó la referida liquidación de costas (Pág. 99, *ejusdem*).

4.- La apelación. Oportunamente el vocero judicial de la parte demandada interpuso el recurso de reposición, y en subsidio, el de apelación, arguyendo que debían tenerse en cuenta ciertos factores para la fijación de agencias, conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, entre ellos, la duración de la gestión, que en este caso había sido de casi 14 años; además, de las cargas que habían tenido que

asumir que afirmó no habían sido consideradas para la fijación de las agencias (Pág. 100 a 102 *ibídem*).

De otro lado, arguyó que el numeral 1.8 del artículo 6° del Acuerdo 1887 de 2003, establecía *"hasta el quince por ciento (15%) del valor del pago ordenado o negado en la pertinente orden judicial; si, además, la ejecución ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementara en un porcentaje igual al que fije el juez. Segunda instancia. Hasta el cinco por ciento (5%) del valor del pago confirmado o revocado total o parcialmente en la respectiva providencia; si, además, la ejecución ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez."* Y que el Acuerdo PSAA-16-10554 del 05 de agosto de 2016, había llenado el vacío que tenía el acuerdo inicial, en cuanto al tope mínimo, pues señalaba: *"Si se dicta sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado, entre el 3% y el 7.5% del valor total que se ordene pagar en el mandamiento de pago. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V"*.

Así las cosas, expuso que considerando que en el mandamiento de pago se ordenó el pago de un capital de \$250,000,000 e intereses desde el 01 de junio de 2006, el monto de las agencias en derecho fijado era exageradamente inferior al porcentaje establecido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cualquiera de los 2 acuerdos citados, puesto que tomando únicamente el capital, el porcentaje ascendía al 3.2%, echando de menos tanto en la primera instancia como en la segunda, los intereses que hacen parte de la orden de apremio impartida en el proceso.

5.- Decisión de la reposición. En proveído del 24 de noviembre de 2022, el Juzgado de primera instancia mantuvo incólume la decisión cuestionada horizontalmente, considerando que la apreciación efectuada en el recurso en cuanto a que debía partirse del mínimo impuesto por el Acuerdo PSAA16- 10554 del 2016, esto es, el 3%, en razón al vacío que dejó su antecesor, resultaba improcedente, dado que dicha regulación no era aplicable al caso, por cuanto la vigencia contemplada en su numeral 7°, y era para litigios iniciados a partir del 05 de agosto de 2016 y, en consecuencia, al no estar establecido un mínimo en la regulación vigente, debía el operador jurídico

moverse entre el 0.1 y 15 %.

Por tanto, señaló que las agencias en derecho fijadas en primera instancia, correspondía a la suma de \$8.000.000, y en segunda a \$1.656.232, que equivalía al 3,20% y 0.66% del capital que se negó pagar.

De otro lado, adujo que, el debate debía circunscribirse a las agencias en derecho fijadas en primera instancia y, por ende, debía solo considerarse el tiempo que había durado el litigio en la misma, el cual había demorado solo dos (02) años, por lo que la suma fijada se compadecía con la duración de dicha instancia, sumado a que no había sido el apoderado judicial hoy inconforme, quien había representado desde un inicio al demandado.

Además, señaló que no era lógico incluir los intereses del capital para determinar el monto de las agencias, pues se había declarado probada la falta de claridad de la obligación incorporada en el pagaré y ordenado cesar la ejecución.

Por último, precisó que las agencias en derecho fijadas en segunda instancia, no podían ser modificadas por el a quo, pues ello implicaría invadir su competencia, razón por la cual no se hacía ningún pronunciamiento al respecto, considerando que debía ser el superior que adoptara la decisión que correspondiera.

CONSIDERACIONES

1.- De la liquidación de costas. Las costas procesales son los gastos útiles o necesarios en los que debe incurrir la parte que resulta vencedora en un proceso ya sea para iniciar e impulsar el mismo, o para resistir el que es formulado en su contra, según sea el caso.

Ahora, el legislador enunció en el precepto 365 del Código General del Proceso, los eventos en los cuales hay lugar a imponer condena en costas y a cargo de quien, contemplando en el numeral 1° que se impondrá a la parte vencida en el proceso y a quien le resulte desfavorable el recurso de apelación,

casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya formulado.

Dentro de dicha liquidación, conforme lo establecido en el numeral 3° del artículo 366 *ibídem*, se incluyen, entre otros, el valor de las agencias que sean señaladas por el funcionario judicial cognoscente, en cualquiera de las instancias, y debe ser realizada de manera concentrada por el juzgado que haya adelantado el trámite del proceso en primera o única instancia, conforme a las reglas que se establecen en la citada norma.

2.- De las agencias en derecho. Igualmente, el precepto 366 del Código General del Proceso, en su numeral 4°, señala que para la fijación del monto correspondiente a las agencias en derecho, el juez debe atender las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003² (modificado por el Acuerdo No. 2222 del 10 de diciembre de 2003 en cuanto a los procesos ordinarios, abreviados y verbales y adicionado por el Acuerdo 9943 de 2013, en cuanto a la renuncia o desistimiento de pretensiones), señalando que en los eventos que éstas establezcan solamente un mínimo, o éste y un máximo se debe tener en cuenta, además, la naturaleza, la calidad, la duración de la gestión realizada por el apoderado, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales, sin que en ningún evento pudiera fijarse una suma superior al máximo.

Sobre este mismo aspecto, el artículo 3° del citado Acuerdo 1887, establece:

“ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.”

Dicho Acuerdo reguló para la fijación de las agencias en derecho en los

² Aplicable al caso concreto, por tratarse de un asunto iniciado antes de la vigencia de ACUERDO No. PSAA16-10554, conforme lo contemplado en el artículo 7 de esta disposición.

procesos ordinario, en primera instancia, hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia; y para lo eventos en que además se reconociera o negaran obligaciones de hacer, un incremento hasta de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

Ahora, para quien pretenda cuestionar el monto señalado por concepto de agencias en derecho, deberá formular recurso de reposición y/o apelación en contra del auto que pruebe la liquidación de costas, al tenor de lo establecido en el canon 366, numeral 5° del Código General del Proceso.

3.- Caso concreto. Manifestó la parte demandada su desacuerdo frente al monto de las agencias fijadas tanto en primera, como en segunda instancia, arguyendo que no se había considerado para tal efecto, el tiempo de duración del proceso y las diferentes cargas asumidas por dicha parte con relación al trámite del asunto; además, adujo que como el Acuerdo 1887 de 2003, tenía un vacío en cuanto al rango mínimo que debía considerarse para la fijación de dicho rubro, debía acudirse al Acuerdo PSAA-16-10554 de 2016, que establecía un mínimo del 3% para tal efecto.

Sin embargo, consideró la juez de primer grado que solo era viable pronunciarse con relación a la inconformidad planteada frente a las agencias fijadas en primera instancia, por cuanto las de segunda, habían sido señaladas por esta Corporación, lo que impedía hacer referencia a los argumentos del recurso respecto de la misma so pena de invadir la órbita de competencia de la misma.

Al respecto, debe precisarse que el Código General del Proceso eliminó la objeción a la liquidación de costas y las agencias en derecho que consagraba el Código de Procedimiento Civil, y en su lugar, estableció que la inconformidad respecto de las expensas liquidadas y monto de las agencias debía aducirse mediante recurso de reposición y apelación en contra del auto que aprobara la liquidación de costas.

Igualmente, modificó la forma de realizar dicha liquidación, estableciendo

que debía hacerse por el juzgado de primera instancia de manera concentrada; esto es, mientras que con el Código de Procedimiento Civil se efectuaba a continuación de la condena y fijación del monto de las agencias en cada una de las instancias, actualmente, le corresponde realizarla al secretario de la agencia judicial que haya conocido en primer grado únicamente, en la que debe incluir todos los gastos judiciales que haya efectuado la parte beneficiada con dicha condena y las agencias fijadas en ambas instancias, salvo que se trate de condena impuesta en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión, o que sea a favor o en contra de un tercero, evento en el cual debe realizarse inmediatamente ejecutoriada la referida providencia o el auto que disponga cumplir lo resuelto por el superior, conforme lo señalado por los numerales 3° y 6° del precepto 366 del Estatuto General del Proceso.

Significa lo anterior, que actualmente la oportunidad procesal y el mecanismo con el que cuentan las partes para controvertir tanto las expensas que se incluyan en la liquidación de costas y el monto de las agencias en derecho que se fijen tanto en primera instancia, como en segunda, es el término de ejecutoria del auto mediante el cual se aprueba dicha liquidación.

Así las cosas, corresponde al juez que conozca del proceso en primera instancia, definir la reposición que se formule en contra de la aprobación de las costas, incluso cuando ésta cuestione el monto de las agencias fijadas por el magistrado sustanciador que conoció de alguna apelación en segunda instancia, pues no interesa qué funcionario haya fijado el monto de las agencias, ya que la norma no contempló tal distinción, ni estableció expresamente que el valor señalado por concepto de agencias en derecho en esta instancia no fuera susceptible de ser controvertida.

Por tanto, no le era dable a la a quo, abstenerse de pronunciarse frente a la inconformidad planteada frente a las agencias fijadas por esta Corporación, aduciendo la invasión de la órbita de la competencia de hacerlo, pues de acuerdo con el trámite establecido por el legislador para controvertir dicho aspecto, el competente es el funcionario judicial de primera instancia.

Clarificado lo anterior, entrará este Tribunal a pronunciarse frente a los

argumentos planteados por el recurrente para cuestionar el monto señalado tanto en primera, como en segunda instancia, por agencias en derecho.

Respecto al vacío del Acuerdo 1887 de 2003, la a quo indicó que no era admisible, por cuanto la norma aplicable al caso concreto era precisamente esta disposición, modificada por el Acuerdo 2222 del mismo año, el cual establecía en su numeral 1.8 para procesos de primera instancia, un máximo del quince por ciento (15%) del valor del pago ordenado o negado en la pertinente orden judicial y que al no establecer un mínimo era viable partir desde el cero punto uno por ciento (0.1%).

Al respecto, tenemos que realmente no se trata de un vacío de la norma, sino que es factible que las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en dichos actos administrativos, establezcan rangos, señalando solamente un mínimo o un máximo, o ambos, como se desprende del numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso; debiendo entenderse, como lo consideró la juez de primer grado que en los eventos en que se señala solamente un máximo, el funcionario judicial tiene como piso o base el 0.1%.

Incluso, en el artículo 3° y 4° del Acuerdo 1887 de 2003, cuando se hace referencia a las tarifas que deben ser consideradas por el operador jurídico para la fijación de las agencias en derecho, se hace énfasis al máximo, pues es el tope que no puede ser sobrepasado por el mismo; por tanto, en el caso concreto, tal como lo refirió el ente judicial de primer grado, el rango o parámetro que debía considerarse para fijar las agencias en derecho era entre el 0.1% y el 15%, para la primera instancia; y el 0.1% y el 5%, para la segunda.

Ahora, en lo que respecta al tiempo de duración del proceso y la actuación surtida dentro del mismo, debe precisarse que dentro de los criterios que establece el artículo 3° del citado Acuerdo, y el numeral 4 del precepto 366 del Código General del Proceso, señala que deben considerarse, entre otros, la “calidad y duración útil de la gestión ejecutada” (resalto intencional); es decir, que no puede tomarse como referencia de manera objetiva el tiempo transcurrido entre la iniciación del proceso y su finalización, sino que además, resulta necesario examinar entre este interregno, cuál implicó actuación

efectiva y eficaz de la parte favorecida con la condena, en aras de atribuirle a la parte contraria la carga de las demoras que se hayan podido producir en el trámite por causas ajenas a ésta.

Así las cosas, debe considerarse que el proceso en primera instancia tuvo una duración de dos años aproximadamente, y en segunda de siete meses, pues no puede incluirse, como viene de explicar antes, el tiempo que estuvo el proceso al despacho a la espera de la decisión por parte del funcionario judicial, por no serle atribuible a ninguna de las partes, por lo que no podría ni usarse a favor o entra de éstas.

Finalmente, para consolidar todos los factores necesarios para el cálculo del monto de las agencias, debe establecerse el valor sobre el cual debe imputarse el porcentaje que, según los criterios a considerar, deba aplicarse en el caso concreto, que en atención a lo contemplado en el artículo 6, numeral 1.8 del Acuerdo 1887 de 2003, para los procesos en primera instancia, corresponde al *“valor del pago ordenado o negado en la pertinente orden judicial”*; y en segunda al *“valor del pago confirmado o revocado total o parcialmente en la respectiva providencia”*.

Es decir, que contrario a lo señalado por la a quo, deben considerarse tanto capital como intereses, pues en primera instancia, se dispuso continuar con la ejecución, por dichos aspectos, siendo éstos el valor ordenado en la sentencia de primer grado; y en segunda instancia, al revocarse la decisión y ordenarse cesar la ejecución, se hizo respecto de ambos aspectos.

Ahora, no interesa, pues tal distinción no la hizo la norma, la razón en la que se fundamente la decisión, esto es, no pueden examinarse las consideraciones en la que el respectivo juez o magistrado soportó la decisión de conceder o negar las pretensiones, ni la de revocar o confirmar una providencia, según sea el caso, para seleccionar cuáles valores han de incluirse dentro de la estimación del monto de las agencias y cuáles no, ya que la norma al señalar “el valor del pago”, hizo referencia a la sumatoria de todos los conceptos.

Corolario con lo expuesto, para la determinación del monto de las agencias en este caso, deben ser considerados tanto el capital que asciende a la suma de \$250.000.000, como los intereses de plazo causados entre el 01 de junio y el 01 de julio de 2006, a la tasa del 0.8% mensual y los moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida, producidos desde el 02 de julio de 2006 hasta el 08 de octubre de 2008, fecha de sentencia de primera instancia, los cuales asciende a \$144.477.646,67, para un total de **\$394.477.646,67**.

Es así que, si bien es cierto que el monto señalado por agencias en derecho en primera instancia, se encuentra dentro del rango o parámetro establecido en el Acuerdo 1887 de 2003, pues no supera el 15% sobre dicho valor, también lo es, que el mismo, solo correspondería a un 2.028%, porcentaje que no se compadece con la actuación útil adelantada por la parte, sin consideración al profesional del derecho que estuviera representándola, pues tal como lo ha precisado la jurisprudencia “... **las agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento**, las cuales —vale la pena precisarlo— se decretan en favor de la parte y no de su representante judicial”³ (Negrillas y subrayas fuera del texto); por lo que esta Corporación estima viable incrementarlo hasta el 3.5%, que fue incluso el porcentaje que en un principio estimó el juez de primer grado como proporcional al asunto.

Respecto de las agencias de segunda instancia, debe indicarse que no solo no fueron tasadas en salarios mínimos legales mensuales, esto es, sin consideración a los porcentajes que establecía el Acuerdo que le era aplicable, sino que, además, el valor fijado equivaldría al 0.42%, que tampoco se compadece con la actuación de la parte en segundo grado, por lo que también estima procedente este Tribunal su incremento en un 1%.

Así las cosas, se incrementarán las agencias en derecho, en dichos porcentajes, realizando las respectivas aproximaciones: en primera instancia, a la suma de \$13.800.000 y en segunda instancia, en el monto de \$3.900.000.

En consecuencia, se revocará el auto que aprobó la liquidación de

³ Sentencia C - 539 del 28 de julio de 1999, citada en la sentencia C - 89 de febrero 13 de 2002

costas, para en su lugar, rehacer la liquidación con los incrementos antes referenciados.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **REVOCA** el auto proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, el 27 de febrero de 2020, dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por Carlos César Lulle Borda en contra de Luis Guillermo Vélez Upegui y, en su lugar,

RESUELVE

PRIMERO. REHACER la liquidación de costas en los siguientes términos:

Agencias Primera Instancia	\$13.800.000
Agencias Segunda Instancia	\$3.900.000
TOTAL	\$17.700.000

SEGUNDO. APROBAR la anterior liquidación de costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022